

Rancagua, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en esta causa **RIT O-289-2021**, Bárbara Donoso Ríos, abogada, en representación del **SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS**, Rut N° 61.606.800-8, persona jurídica de Derecho Público, ambos domiciliados en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 609, Rancagua, interpone demanda de desafuero maternal en contra de **CAROLINA BEATRIZ SEPÚLVEDA CONTRERAS**, cédula de identidad N° 18.385.718-5, enfermera, domiciliada en Honduras N° 1383, Villa Los Profesores, Rancagua. Funda la demanda señalando que la demandada ingresó a trabajar para el Servicio de Salud del Libertador General Bernardo O'Higgins, en el cargo de enfermera en la Unidad de Hospitalización del Hospital de Graneros, con la finalidad de prestar servicios en calidad de honorarios a suma alzada, entre el 06 de abril de 2021 y hasta el 30 de junio de 2021, como refuerzo para el desarrollo del programa ministerial Covid-19. Que esta prestación de servicios fue formalizada mediante la suscripción de un contrato de honorarios a suma alzada, el cual debería concluir con la llegada del plazo, esto es, el 30 de junio de 2021, ya que fue suscrito en el marco de la nueva dotación de personal necesario para el desarrollo del programa ministerial ya referido, para efectos de abordar la contingencia Covid-19, financiado por el Ministerio de Salud. Que con fecha 29 de abril de 2021, la demandada informa a su jefatura directa, doña Victoria Guzmán, coordinadora de Hospitalización Covid-19 en el Hospital de Graneros, de su estado de gravidez, acompañando certificado médico de embarazo de misma fecha, que indica que es portadora de embarazo de 8 semanas. Que entonces, se han dado por notificados formalmente de dicha circunstancia, y que por tanto goza de fuero laboral por maternidad conforme a la Ley, no obstante la naturaleza jurídica transitoria del vínculo que la une al hospital señalado, haber prestado servicios por sólo 23 días y, en consecuencia, al Servicio de Salud O'Higgins. Que atendida la naturaleza jurídica del vínculo que une al Servicio de Salud O'Higgins con la demandada y la temporalidad acotada fijada como extensión del mismo, queda de manifiesto que



XSXMZKVC

su representada no cuenta con los recursos necesarios para mantener en el tiempo un contrato cuyo financiamiento se encontraba presupuestado para labores específicas atinentes a la emergencia sanitaria Covid-19, y solo hasta el vencimiento del plazo, el que se encontraba pactado solo para el lapso de 3 meses, venciendo irremediablemente el día 30 de junio de 2021. Hace presente que si bien en un principio la demandada fue contratada para funciones específicas por un periodo determinado (tres meses), el Servicio de Salud, al momento de tomar conocimiento de su estado de embarazo y con el sólo objeto de cumplir con la legislación laboral, mantiene su contratación a la espera de la autorización conforme al artículo 174 del Código del Trabajo, pese a haberse desempeñado por sólo 23 días en el Hospital de Graneros. Que en cuanto a Derecho, se citan los artículos 201 y 159 N° 4 del Código del Trabajo. Solicita tener por interpuesta demanda de desafuero laboral y, en definitiva, conceder el desafuero, autorizando a su representada a poner término a la relación laboral que la vincula con Carolina Beatriz Sepúlveda Contreras, por la causal de derecho contemplada en el artículo 159 N° 4 del Código del Trabajo, esto es, vencimiento del plazo convenido en el contrato, con expresa condenación en costas en caso de oposición.

SEGUNDO: Que CAROLINA BEATRÍZ SEPÚLVEDA CONTRERAS, enfermera, contesta la demanda de desafuero maternal, solicitando sea rechazada en todas y cada una de sus partes. Expone que es efectivo que ingresó a trabajar para el Servicio de Salud del Libertador General Bernardo O'Higgins en el cargo de enfermera, en la Unidad de Hospitalización del Hospital de Graneros, con la finalidad de prestar servicios en calidad de honorarios a suma alzada, durante el periodo que medió entre el 06 de abril de 2021 hasta el 30 de junio de 2021, como refuerzo para el desarrollo del programa ministerial Covid-19, y que es efectivo que con fecha 29 de abril de 2021 informó a su jefatura directa, doña Victoria Guzmán, coordinadora de hospitalización Covid-19 en el Hospital de Graneros, de su estado de gravidez, acompañando certificado médico de embarazo, siendo portadora de embarazo de 8 semanas de embarazo. Señala que ingresó a prestar servicios para la demandante a través de un convenio de fecha 15 de abril de 2021,



el que reconoce que ingresó a trabajar con fecha 06 de abril de 2021, y cuya duración era hasta el 30 de junio de 2021. Que la naturaleza jurídica del contrato que suscribió con el Servicio de Salud O'Higgins era de honorarios a suma alzada, para prestar apoyo para el cumplimiento del programa ministerial Covid-19 en el establecimiento Hospital de Graneros. Indica que estando la relación laboral vigente al momento de interponerse la demanda, no sería aplicable la hipótesis de terminación de los contratos de trabajo, al menos en lo que se refiere a la causal N° 4, vencimiento del plazo convenido en el contrato, no por los hechos contenidos en el libelo de demanda, toda vez que el Servicio de Salud O'Higgins ni siquiera esperó que se verificara la hipótesis legal para solicitar la terminación anticipada del convenio firmado por las partes, lo que hace suponer que el Servicio de Salud O'Higgins nunca quiso cumplir con las obligaciones que se le impone a los empleadores respecto de mujeres en su situación. Sostiene que se debe considerar la importancia que tiene la maternidad en las relaciones laborales y la intención del legislador de protegerla como un bien jurídico de los más valiosos cultivados por la sociedad, y la facultad que el Tribunal posee en virtud del artículo 174 del Código del Trabajo, debe ser interpretada en vista de los instrumentos internacionales que protegen a la maternidad y la infancia, como también el espíritu de la legislación interna vigente, es por ello que esta dimensión debe ser considerada al momento de fallar el asunto sometido a su decisión. Que en este sentido, el dictamen de Contraloría General de la República N° 14.498, de 2019, hizo extensivo los derechos referidos a la protección de la maternidad contenidos en el Título II, Libro II del Código del Trabajo, a las servidoras contratadas a honorarios de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, pronunciamiento que viene a corregir el problema que se presenta para las trabajadoras a honorarios, muchas de ellas por años, en virtud de la ejecución de programas presupuestarios, sin que se le reconozcan expresamente los derechos de protección a la maternidad. Señala que las razones esgrimidas en la demanda carecen de una lógica proteccional a la maternidad, toda vez se ha reconocido ampliamente que las mujeres contratadas a honorarios que



desempeñan labores en virtud de un programa presupuestario, como es el caso del programa Covid-19, prestan servicios en cumplimiento de un mandato del legislador, que ha encargado a un organismo determinado la satisfacción de necesidades públicas que expresamente ha consignado al establecer dicho programa, por ende, se trata de labores que, si bien son transitorias, son propias de la institución por encargo de la norma presupuestaria correspondiente, ergo, no es posible esgrimir por la demandante que no cuenta con los recursos suficientes para mantener en el tiempo una relación laboral en las condiciones en las que se encuentra, motivo por el cual se encuentra amparada por lo señalado en el artículo 201 del Código del Trabajo. Que en cuanto a Derecho, y como normas de protección a la maternidad, se cita el artículo 25 N° 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948; artículo 19 numeral 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del año 1966; Convenio 103 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Protección de la Maternidad, ratificado por Chile el año 1994. Que también se expresa que en el orden constitucional y legal, la Corte Suprema ha señalado que la protección de la maternidad y del que está por nacer se consagra en la Constitución de la República de Chile, en los incisos 2° y 3° del artículo 1, N° 1, N° 2 y N° 16 del artículo 19, y en cuanto a lo legal, el Código del Trabajo ha establecido la protección de la maternidad en su artículo 201. Que, finalmente, se hace presente que en varios conflictos en donde los Juzgados de Letras del Trabajo han otorgado la autorización para despedir a una trabajadora con fuero maternal, siendo, además, ratificada dicha resolución por las respectivas Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema, con ocasión de recursos de Unificación de Jurisprudencia, ha revertido el sentido de los fallos, impidiendo el término de la relación laboral de la trabajadora, citando para tal cometido la robusta normativa que protege la maternidad y la vida del que está por nacer. Solicita tener por contestada la demanda de desafuero, solicitando que el libelo pretensor sea rechazado en todas y cada una de sus partes, no dando por tanto lugar a la autorización de poner término a la relación laboral entre las partes, con expresa condenación en costas.



TERCERO: Que en la audiencia preparatoria, no se logró conciliación. Luego, se recibió la causa a prueba y las partes ofrecieron los distintos medios que incorporaron en la audiencia de juicio llevada a cabo.

CUARTO: Que de las presentaciones de las partes, no se encuentra controvertido que las partes suscribieron un contrato de honorarios a suma alzada, para que la trabajadora demandada prestara servicios como enfermera en la Unidad de Hospitalización del Hospital de Graneros, entre el 06 de abril de 2021 y hasta el 30 de junio de 2021, en el contexto del desarrollo del programa ministerial para abordar la contingencia de Covid-19. Que, por otra parte, tampoco es un hecho controvertido que la actora efectivamente se encuentra embarazada, por lo que goza de fuero maternal.

QUINTO: Que la parte demandante sostiene que la trabajadora fue contratada para cumplir funciones específicas, y que no se contaba con los recursos necesarios para financiar el contrato celebrado más allá del vencimiento del plazo convenido. Que para acreditar lo anterior, se incorporó la siguiente prueba documental:

1.- Certificado de embarazo, emitido por. Juan A. Pereira, médico ginecólogo, del Centro Médico Ecolook, de fecha 29 de abril de 2021.

2.- Convenio con Personas Naturales Honorarios, de fecha 15 de abril de 2021, celebrado entre el Servicio de Salud O'Higgins y Carolina Sepúlveda Contreras.

3.- Anexo Convenio con Personas Naturales Honorarios, de fecha 12 de julio de 2021.

4.- Boletas de honorarios electrónicas, emitidas por Carolina Sepúlveda Contreras al Servicio de Salud Hospital de Graneros, de los meses de abril, mayo y junio de 2021. Se adjuntan certificados de cumplimiento de funciones.

SEXTO: Que la parte demandada, a su turno, acompañó el convenio, anexo y certificado de embarazo, referidos en el motivo precedente.



SÉPTIMO: Que, además, se citó a absolver posiciones al representante legal del Servicio de Salud O'Higgins, no compareciendo éste ni la persona designada para tal efecto, por lo que se solicitó hacer efectivo el apercibimiento legal.

OCTAVO: Que el Tribunal, como medio de prueba, ordenó que la parte demandante Servicio de Salud O'Higgins exhibiera documentación relacionada con los recursos destinados a financiar el programa en el cual se desempeñaba la trabajadora. Que se exhibió el Memorándum N° 728, de fecha 30 de noviembre de 2021, de Felipe Arriagada Aguilera, Jefe Departamento de Gestión de las Personas, a Mauricio Cárdenas Arriagada, Jefe del Departamento Jurídico; que en el documento se expresa que el presupuesto inicial mediante Decreto N° 558 otorgado para dicha estrategia Covid-19 corresponde a la suma de M\$6.557.497.-, y en junio de 2021, mediante Decreto N° 1234, se otorga presupuesto para “Refuerzo Pandemia Covid-19 APS”, por la suma de M\$32.585.-, lo que da un total de M\$6.590.082.-, en tanto el gasto Covid-19 a diciembre proyectado será de M\$10.728.113.-, de acuerdo a la tabla que se adjunta, por lo que la estrategia Covid no es financiada de acuerdo a una sobreejecución de M\$4.170.616.-.

NOVENO: Que el cuadro al cual se hace referencia en el Memorándum es el siguiente:

ESTABLECIMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE*	Total general
DSS	8,084,636	6,206,433	8,870,153	10,277,451	14,540,153	16,904,461	26,792,238	48,359,458	13,824,000	12,522,759	9,085,760	9,085,760	184,533,262
RANCAGUA	171,376,124	205,613,528	256,626,032	310,142,040	550,767,482	666,144,878	746,779,519	689,754,423	439,283,463	379,647,520	209,966,828	209,966,828	4,836,068,665
SAN FERNANDO	86,143,576	77,732,862	110,149,324	138,851,933	178,410,732	200,628,646	207,064,630	216,157,107	194,139,868	146,442,766	98,614,657	98,614,657	1,752,950,758
SANTA CRUZ	66,046,031	64,823,011	73,534,664	95,542,662	98,468,189	105,920,123	122,259,250	179,040,696	107,237,396	82,983,441	68,185,154	68,185,154	1,132,225,771
RENGO	68,802,593	77,454,412	79,760,053	83,943,335	81,172,065	94,958,772	109,875,701	182,573,058	99,435,398	81,888,771	82,352,071	82,352,071	1,124,568,300
GRANEROS	16,280,912	14,645,193	23,754,572	24,143,626	21,834,802	18,640,793	22,279,605	29,650,403	20,997,581	14,790,266	13,957,857	13,957,857	234,933,467
PEUMO	10,161,100	10,108,307	16,642,947	21,359,107	20,793,103	18,763,196	23,784,820	23,815,153	19,567,537	15,043,426	12,715,827	12,715,827	205,470,350
SAN VICENTE	10,459,742	10,807,009	19,265,830	19,331,976	19,331,976	17,499,631	19,406,759	23,173,565	28,521,700	15,523,404	14,180,087	14,180,087	211,681,766
PICHIDEGUA	5,976,420	7,664,904	7,233,424	10,282,275	9,670,844	9,479,233	7,521,273	10,798,361	10,006,884	8,318,400	2,845,307	2,845,307	92,642,632
CHIMBARONGO	3,963,020	4,187,802	7,452,165	9,115,825	14,322,917	12,679,351	13,706,031	13,513,718	14,706,798	10,967,146	11,149,778	11,149,778	126,914,329
MARCHIGUE	7,090,842	6,876,160	10,503,813	9,554,982	11,108,892	10,582,197	10,640,746	11,193,706	10,941,270	5,839,199	3,691,203	3,691,203	101,714,233
PICHILEMU	17,129,463	16,988,336	15,857,067	29,558,455	29,816,656	28,157,192	26,417,969	31,617,539	26,157,888	25,550,171	5,921,562	5,921,562	239,093,860
LODOL	3,751,403	5,540,339	4,748,862	5,431,940	5,861,303	7,541,542	6,873,787	6,873,787	6,873,787	6,873,787	3,150,708	3,150,708	66,671,953
LITUECHE	7,285,751	7,285,751	6,725,335	8,476,258	13,806,194	7,224,344	5,808,327	7,285,751	7,285,751	6,917,311	5,334,357	5,334,357	88,769,487
COINCO	9,220,252	9,259,490	22,753,889	20,053,220	21,883,389	22,716,737	22,768,436	20,915,749	16,602,849	9,654,004	3,618,103	3,618,103	183,064,221
NANCAGUA	8,316,200	8,134,298	12,486,055	13,369,787	14,714,177	14,187,227	12,733,479	14,187,227	10,787,003	11,021,319	3,426,933	3,426,933	126,790,638
Total general	500,088,065	533,327,835	676,364,185	809,434,872	1,106,502,874	1,252,028,323	1,384,712,570	1,508,909,701	1,026,369,173	833,983,690	548,196,192	548,196,192	10,728,113,672

DICIEMBRE* Gasto Proyectado



XSXMZKVC

DÉCIMO: Que a juicio de este sentenciador, si bien se trata de un documento que emana de la propia parte, los antecedentes aparecen como suficientemente fundados como para establecer el mayor gasto que ha significado el programa de salud Covid-19.

UNDÉCIMO: Que no obstante lo anterior, consta que se ha celebrado un anexo para prorrogar la vigencia del plazo de contratación de la demandada hasta el 31 de diciembre de 2021, expresándose en el N° 2 que se modifica el convenio celebrado con anterioridad, en cuanto a la fecha de término, “con el objetivo de dar continuidad a las funciones que se enmarcan dentro del decreto de alerta sanitaria en todo el territorio nacional de la República para enfrentar la amenaza pública producida por la propagación a nivel mundial del nuevo coronavirus COVID 19”. Que este anexo fue suscrito con fecha 12 de julio de 2021, esto es, con posterioridad al plazo originalmente pactado (30 de junio de 2021), debiendo hacerse presente, tal como se hace en la contestación, que la demanda fue interpuesta el 19 de mayo de 2021, es decir, antes incluso de la fecha de vencimiento del plazo convenido en el convenio de abril de 2021.

DUODÉCIMO: Que el documento referido en el motivo anterior (anexo convenio) modifica totalmente el planteamiento de la demanda y lo controvierte, pues si bien se menciona en ésta que se ha mantenido la contratación mientras se espera la autorización judicial, el anexo, suscrito con bastante posterioridad, da cuenta que su finalidad es la continuidad en las labores que cumplía la demandada dentro del programa para enfrentar el Covid-19, lo que permite establecer que las labores para las cuales fue contratada Carolina Sepúlveda, si bien acotadas al programa Covid-19, no han concluido, elemento que debe ser considerado por el Tribunal para ponderar los bienes jurídicos comprometidos en la litis.

DÉCIMO TERCERO: Que de esta manera, si bien el contrato a honorarios concluía el 30 de junio de 2021, las partes suscribieron un anexo que prorrogó su vigencia hasta el 31 de diciembre, siempre en el contexto del programa Covid-19, fecha respecto de la cual no se ha solicitado autorización para proceder al



desafuero. Por otro lado, de este mismo antecedente aparece que las labores de la demandada no son específicas y acotadas.

DÉCIMO CUARTO: Que el artículo 174 del Código del Trabajo faculta al Juez del Trabajo para ponderar las circunstancias del caso y, según lo anterior, otorgar o no otorgar autorización para proceder al despido de una trabajadora con fuero. Que en el caso de marras, se ejercerá esta labor de ponderación, atendidas las circunstancias excepcionales que se invocaron para la contratación de la demandada, las que hasta la fecha se mantienen, conforme el anexo suscrito, y por estas mismas circunstancias se preferirá la protección de la vida e integridad física de la trabajadora y de hijo(a), conforme al artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, y Convenio N° 158 de la Organización Internacional del Trabajo, que en su artículo 5 excluye de las causas justificadas para poner término a las relaciones de trabajo las ausencias por licencia de maternidad y las responsabilidades familiares.

DÉCIMO QUINTO: Que por las razones expuestas precedentemente, no resulta procedente otorgar la autorización para despedir a la demandada que goza de fuero maternal, conforme al artículo 174 del Código del Trabajo.

DÉCIMO SEXTO: Que el resto de la prueba rendida no altera lo concluido. Que en efecto, el certificado de embarazo nada aporta al debate en atención a que dicho estado de la demandada no fue objeto de controversia. Que las boletas de honorarios tampoco tienen mayor mérito probatorio, puesto que no se ha discutido la naturaleza jurídica de los servicios que prestaba Carolina Sepúlveda. Que, finalmente, no se hará efectivo el apercibimiento solicitado por la parte demandada en relación a la prueba confesional, ya que en el escrito de contestación los argumentos se exponen no son para controvertir el tipo de contratación o el plazo, sino que elementos para ponderar la protección a la madre y al hijo o hija en gestación.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta.



Y teniendo además presente lo dispuesto en los artículos 1, 4, 7, 9, 159 N° 4, 174, 201, 425, 432 y 446 y siguientes del Código del Trabajo, se declara:

I. Que se rechaza la demanda de desafuero interpuesta por el Servicio de Salud Región de O'Higgins en contra de Carolina Beatriz Sepúlveda Contreras.

II. Que no se condena a la parte demandante a pagar las costas de la causa, por estimarse que tuvo motivo plausible para litigar, además de gozar de privilegio de pobreza de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley N° 10.383, en relación al artículo 16 del Decreto Ley N° 2.763, de 1979.

ANÓTESE, DÉJESE COPIA AUTORIZADA EN EL REGISTRO DE SENTENCIAS Y ARCHÍVESE EN SU OPORTUNIDAD.

RIT O-289-2021

RUC 21-4-0336778-5

Pronunciada por don ALONSO FREDES HERNÁNDEZ, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua.

En Rancagua a veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución precedente.



A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>